

Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó el de nulidad que interpuso en contra de la que desestimó la demanda de desafuero maternal.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, la materia de derecho que se propone uniformar consiste en el *“sentido y alcance de la facultad contenida en el artículo 174 del Código del trabajo, en tanto otorga al juez del trabajo una facultad para autorizar o no la desvinculación de una trabajadora amparada por fuero de maternidad, en el sentido de establecer que aquella facultad no implica incluir nuevos requisitos para el desafuero, sino que solo exige ponderar los elementos para llegar a una conclusión determinada”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, en primer lugar, la sentencia dictada por la Corte Suprema, en los autos Rol N° 15.867-2019, en que se determinó que al juez laboral se le concede la potestad de consentir o denegar la petición formulada por el empleador para desvincular a una trabajadora embarazada, que debe ejercer ya sea que se invoque una causal de exoneración subjetiva u objetiva, y para decidir, en uno u otro sentido, debe examinar los antecedentes incorporados en la etapa procesal pertinente, conforme a las reglas de la sana crítica y a la luz de la normativa nacional e internacional, no siendo procedente constatar únicamente el vencimiento del plazo del contrato celebrado entre las partes.



Y, en segundo lugar, se adjuntó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, pronunciado en el Rol N° 418-2020, en que se estableció en el mismo sentido que el desafuero es un proceso facultativo del tribunal en el que debe estarse a la prueba rendida, contando el juez con la facultad de autorizar o denegar la petición formulada por el empleador para poner término al contrato de trabajo que lo liga con la trabajadora embarazada, y para decidir, en uno u otro sentido, debe examinar los antecedentes incorporados al juicio, verificándose en el caso concreto que la celebración del convenio con la actora, tuvo como fundamento la existencia de la pandemia, que da cuenta de su carácter temporal y excepcional, en virtud de la que el Estado tuvo que incurrir en una multiplicidad de contrataciones para hacer frente a la crisis sanitaria.

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada, desde que la situación resuelta en esta causa fue decidida de la misma manera en los fallos de contraste que fueron acompañados, lo que se desprende de la sola lectura de la sentencia impugnada, que estableció que no se demostró que el rol de la trabajadora fuere irrelevante en la producción de la empresa, dado que continuó con sus procesos y necesitando trabajadoras, teniendo presente que el artículo 174 del Código del Trabajo establece una facultad para el juez, quien debe ponderar los derechos en conflicto y, las circunstancias particulares del caso para decidir si la causa de término del contrato de trabajo se alinea con el espíritu protector de la normativa laboral, razones por las que no se determinó que hubo transgresión a la normativa que se invocó vulnerada al rechazarse la demanda de desafuero.

Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de



la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisibile** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

Regístrese y devuélvase.

Nº 229.029-2023.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Dobra Francisca Lusic N. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Maria Angelica Benavides C. Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

